

ING. GABRIEL MARTÍN VALDEZ JUÁREZ,
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.-

Olivia
19 DIC 2018
11:40
DIRECCIÓN
DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ATN. SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGÍA,
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL.

ROGELIO SEAÑEZ PADILLA, mexicano, mayor de edad, por mis propios derechos, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el despacho ubicado en la [REDACTED] de esta Ciudad, autorizando para tales efectos al Licenciado en Derecho **CÉSAR ALEJANDRO BELTRÁN MONTOYA**; ante Usted respetuosamente comparezco para exponer:

Que a través de este escrito, vengo a solicitar a esta dependencia se sirva ordenar informar al suscrito si actualmente existe alguna denuncia o queja popular entablada en contra del establecimiento relativo al Taller de Servicio y Reparación ubicado en la calle Paseos de la Universidad número 14720 del Fraccionamiento Paseos de Chihuahua de esta Ciudad, con superficie de 120.00 metros cuadrados y con clave catastral número 343-042-015; mismo que es propiedad del hoy promovente, tal y como es del conocimiento de esta autoridad.

En caso de resultar afirmativo lo anterior, solicito se me informe el nombre completo del denunciante o querellante, su domicilio, las razones o motivos en que se sustenta su reclamación, las pruebas de cargo presentadas, y la etapa o fase procesal que guarda tal asunto; requiriendo al efecto, se me expida copia certificada de todo lo actuado en el procedimiento administrativo respectivo.

Ante ello, es menester puntualizar que el artículo 1 de nuestra Carta Magna, conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, establece lo siguiente:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad..."

De lo anterior, se advierte que todas las personas y este caso el hoy promovente gozamos de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como, de las garantías para su protección.

Ahora bien, dentro de los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana, se encuentran las Garantías Judiciales consagradas por el artículo 8 del citado instrumento internacional, que establecen lo siguiente:

"Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

La disposición transcrita ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹ en el sentido de que se debe establecer los requisitos observables en instancias procesales, de acuerdo a lo siguiente:

"... el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención."

Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial...

¹ Garantías Judiciales En estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párrafos 27 y 28.

Precisamente, en caso de existir algún procedimiento administrativo en mi contra en relación al establecimiento precisado en líneas supra, es inconcuso que se me están vulnerando los derechos humanos reconocidos por la disposición indicada, pues no he sido oído en ningún procedimiento, mucho menos de manera razonable por una autoridad administrativa competente, independiente e imparcial.

Es decir, si el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el conjunto de requisitos que deben observarse en cualquier procedimiento- **incluyendo el administrativo**-, forzosamente tengo el derecho a que se me respeten los garantías fundamentales indicadas, y en especial la de ser oído previamente.

En la misma tesitura el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece lo siguiente:

"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;

c) concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos² ha interpretado que las garantías previstas en el artículo 8.2 no solo deben limitarse a la materia penal, sino que dichas garantías se deben de aplicar en otras materias como la civil, laboral, fiscal, **administrativa** o de cualquier otra índole al establecer lo siguiente:

"124. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, "sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales" a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.

125. La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden "civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes.

*126. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. **Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso.***

En consecuencia, en dado caso de existir algún procedimiento administrativo instaurado con motivo de denuncia o queja popular en contra de la operación del establecimiento de mi propiedad, estamos ante la presencia de una flagrante violación a mi derecho humano de ser comunicado de manera previa y detallada de la denuncia o queja que en su caso se haya formulado, la concesión del tiempo y medios adecuados para preparar mi defensa; el derecho a defenderme personalmente o de ser asistido por un defensor, el derecho interrogar testigos y obtener comparecencias de testigos o peritos, a no ser obligado a declarar, entre otros.

De igual forma, me estarían vulnerando los derechos previstos por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en específico, los siguientes:

² Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia emitida el 2 de febrero del 2001 en relación al caso Baena Ricardo y Otros Vs. Panamá, párrafos 124, 125 y 126.

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Lo anterior, en concordancia con los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, al establecer dicha garantía lo siguiente:

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

Sin embargo, al no haber sido emplazado al juicio o procedimiento administrativo que se haya instruido en mi contra y que tiene por objeto imponerme sanciones de toda índole, es claro que se me veda el derecho al recurso efectivo o acceso a la justicia.

Ahora bien, en el orden o bloque Constitucional nuestra Carta Magna reconoce al quejoso y toda persona los siguientes derechos humanos:

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento."

De nueva cuenta, se advierte de que en caso de existir algún proceso administrativo en mi contra, es indudable que se me está privando del derecho humano antes invocado, pues pudiera encontrarse latente la posibilidad de que se me imponga una sanción administrativa que tenga como consecuencia privarme del derecho a mi libertad de trabajo, sin que exista juicio seguido previamente establecido en el que se cumplan las formalidades del procedimiento.

En consecuencia, resultaría claro que se me vulneraría el derecho a la audiencia tutelado por el numeral invocado ante la omisión de ser llamado a dicho procedimiento y darme la oportunidad de defenderme.

De igual manera, ante ese supuesto se estarían vulnerando mis derechos reconocidos por el artículo 16 Constitucional, pues se privaría de derechos al llegarse a emitir actos de molestia en mi contra sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Lo anterior es así, pues no he sido notificado o emplazado a procedimiento administrativo que tenga como por objeto emitir una sanción administrativa como puede ser una clausura temporal o definitiva de actividades, multa, amonestación, arresto administrativo o cualquier otra análoga.

Ahora bien, conforme a la ya citada Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, en sus numerales 230 al 240 se prevé el procedimiento que debe agotar esta dependencia a fin de que en uso de sus facultades y atribuciones pueda llegado el momento oportuno, concluir con la imposición de una medida de seguridad o en su defecto, de una sanción administrativa.

En consecuencia, conforme a las garantías y derechos humanos invocados a lo largo del desarrollo del presente concepto de violación, tenemos que se debe respetar al suscrito el derecho a conocer quien depara en mi contra, la denuncia y/o queja, así como las pruebas de cargo que obran en el expediente o carpeta administrativa.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO A SU CONSIDERACIÓN, ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA:

ÚNICO.- Proveer de conformidad.

CHIHUAHUA

018.

ROG

Se eliminó información del documento, ya que contiene datos personales, consistentes en firma y teléfono de un particular de conformidad con los artículos 5 fracción XXXVI, 122 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.